

Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno.

Proveyendo el escrito folio 6: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece Valentina Lorca Núñez, abogada, defensora penal pública, domicilio en Miraflores 178, Piso 18, Comuna de Santiago, en representación Michael Amigo Jaramillo, actualmente bajo prisión preventiva en el CDP Santiago Uno, medida cautelar impuesta en causa RIT N° 3864-2021 del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, e interpone acción constitucional de amparo en favor del imputado ya individualizado, en contra del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, quien por resolución de fecha 27 de mayo de año 2021, resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva pese a haber decretado la suspensión del procedimiento en virtud del artículo 458 del Código Procesal Penal, vulnerando así la garantía constitucional de la libertad personal y seguridad individual, establecido en el artículo 19 N° 7 de nuestra Constitución Política del Estado.

Relata que el 13 de mayo del año 2021, se celebró audiencia de control de la detención y de formalización en contra de su representado, bajo el RUC N° 210047337-8, RIT N° 3864-2021. Indica que, se declaró legal la detención y se formalizó por el delito de robo de especies en lugar habitado, en calidad de autor y el grado de desarrollo del delito es frustrado, decretándose la prisión preventiva.

Refiere que en base a informe psicológico elaborado respecto del amparado y tras conversaciones con éste, se solicitó audiencia para pedir la suspensión del procedimiento en base al artículo 458 del Código Procesal Penal.

Señala que en audiencia de fecha 27 de mayo del presente año, luego del debate, el Tribunal resuelve acoger la petición de la defensa y suspende el procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 458 Código Procesal Penal; que como consecuencia de lo resuelto se pide la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva.

Expone que abierto el debate sobre la revisión de la prisión preventiva, la defensa solicita se deje sin efecto, mientras que el Ministerio Público requiere fuera reemplazada por la internación provisional.

Expresa que el Tribunal rechaza las peticiones de la defensa y la Fiscalía, resolviendo mantener la prisión preventiva, argumentando:



“No deja sin efecto la cautelar por el solo hecho de haberse suspendido el procedimiento, toda vez que dicha suspensión, dice relación solo con presunciones de probable enajenación mental que deben ser reforzadas con el informe del Servicio Medico legal. Aparece también improcedente la petición de mutar la prisión preventiva por internación provisional, conforme lo que establece el art 464 del Código Procesal Penal, toda vez que para ello sería necesario el informe psiquiátrico que recién hoy se solicitó, todo lo anterior, conforme el principio de legalidad en el juzgamiento”.

En cuanto a los fundamentos de derecho, hace presente que estamos frente a una persona privada de libertad: su representado se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva decretada el 13 de mayo del año 2021.

En segundo lugar, aduce que, si bien el amparado estuvo privado de libertad, en virtud de la prisión preventiva dictada en un procedimiento penal de carácter ordinario, lo cierto, es que, de los antecedentes existentes recopilados durante el curso de la investigación se decretó la suspensión del procedimiento ordinario y en consecuencia se debe continuar el procedimiento bajo las reglas del artículo 455 y siguientes del Código Procesal Penal.

Sostiene que en base a los antecedentes se podría solicitar la internación provisional del artículo 464 del Código Procesal Penal y en ese caso el amparado estaría igualmente privado de libertad, por lo que resulta inoficioso cuestionar la legalidad de la privación de la libertad, pero esto es improcedente.

Aduce que en nuestro sistema penal existe la opción de privar a una persona de libertad en base a una pena privativa de libertad, a una medida cautelar de prisión preventiva, el arresto domiciliario en cualquiera de sus modalidades, la internación en un establecimiento psiquiátrico o la internación provisional; las primeras tres se pueden decretar solo para personas imputables o de quienes se tiene certeza que existe una imputabilidad disminuida, mientras que las dos últimas se decretan para personas inimputables o bien personas de quienes se tienen antecedentes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental. Alude que la gran diferencia entre el primer grupo y el segundo es que las primeras tienen por objeto cautelar los fines del proceso, mientras que las segundas adicionalmente persiguen garantizar la vida e integridad de la



persona de una manera especial, siendo el fundamento de ello la salud mental de la persona.

Concluye que por no respetar la forma tendremos a una persona que tiene problemas de salud mental diagnosticados y que hacen presumir una enajenación mental privado de libertad bajo condiciones no acordes a su necesidad, con todo lo que eso significa, pues no solo continuara bajo tratamientos médicos inadecuados, sino que se verá expuesto a situación de seguridad bajo las cuales no tiene las mismas capacidades de reacción que una persona imputable, pues el estrés que genera la cárcel ve aumentado sus efectos dañinos en una persona que ya ve afectada su salud mental.

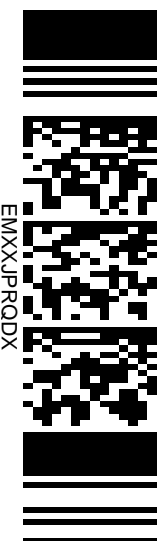
Como tercer punto esgrime que a la luz del artículo 458 del Código Procesal Penal, del debate en audiencia, del contenido del informe psicológico y de la resolución, se puede afirmar que la resolución es ilegal; la norma invocada permite sostener y activar la suspensión del procedimiento cuando aparecen antecedentes que hacen presumir la enajenación mental, lo que fue compartido por el Tribunal y por ello se acogió la petición.

Considera que si es procedente dejar sin efecto la prisión preventiva por el solo hecho de haberse suspendido el procedimiento; que son procedente solo las demás cautelares personales reguladas en el Título V del Libro Primero.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta la acción constitucional de amparo en favor de Michael Amigo Jaramillo en contra del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, quien por resolución de fecha 27 de mayo de año 2021, rechazó la solicitud de la defensa de dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva pese a haberse decretado la suspensión del procedimiento en virtud del artículo 458 del Código Procesal Penal, por no ajustarse la prisión preventiva al estándar normativo vigente, solicitando que se acoja la presenta acción de amparo constitucional y se dispongan las medidas solicitadas en el punto IV del presente libelo.

Segundo: Que con fecha 03 de junio de 2021, doña Claudia Viviana Hermosilla Toro, Juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Reseña que en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago consta el ingreso de la causa RUC 2100471337-8, RIT 3864 – 2021, seguida en contra del imputado Michael Gerald Amigo Jaramillo, actualmente privado de libertad -en prisión preventiva- en el Hospital ASA de Gendarmería Santiago Uno, en la que con fecha 13 de mayo de 2021, en audiencia de



control de detención se ordenó su prisión preventiva tras ser formalizado en calidad de por el delito de robo en lugar habitado frustrado, cometido el 13 de mayo de 2021 en la comuna de Quilicura en perjuicio de la víctima Sebastián Estaban Prado Lira.

Señala que en audiencia de fecha 27 de mayo de 2021, dirigida por el Juez don Cesar Orellana López, con la presencia del imputado Michael Gerald Aigo Jaramillo, el Fiscal don Jonatan Coloma Reyes, el Defensor Penal Público Marcelo Jerez Ávila y de la víctima, el tribunal decretó la suspensión del procedimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 458 del Código Procesal Penal. Agrega que en la misma audiencia, el juez resolvió *“con relación a la petición que hace la Defensa, no se va a acceder a ésta en términos de dejar sin efecto la cautelar, por el sólo hecho de haberse establecido la suspensión del procedimiento conforme al 458 ya que esa suspensión se vincula exclusivamente con presunciones de una probable enajenación mental, que naturalmente tiene que ser reforzada a través de un informe pericial que se ha ordenado realizar al Servicio Médico Legal; en ninguna parte el legislador establece que el efecto propio natural casi automático de la suspensión del procedimiento sea dejar sin efecto la o las medidas cautelares que puedan estar vigentes. Por otro lado, también se rechaza la petición del Ministerio Público de establecer la internación provisional en reemplazo de la prisión preventiva, ya que también aparece improcedente la petición conforme a lo que prevé el artículo 464 del Código Procesal Penal, en el sentido que para estos efectos se requiere precisamente el informe psiquiátrico que recién el día de hoy se ha ordenado realizar al Servicio Médico Legal. Desde esa perspectiva y conforme al principio de la legalidad del juzgamiento se rechazan ambas peticiones”*. La Defensa realiza una pregunta al juez, “para claridad Magistrado, ¿se mantiene en prisión preventiva con el procedimiento suspendido a la espera del informe del Servicio Médico Legal o no?” El juez contesta, “eso es lo que acaba de ocurrir.”

Adjunta las actas de las dos únicas audiencias realizadas en la causa, de 13 de mayo de 2021 y 27 de mayo de 2021, y del informe requerido al Servicio Médico Legal.

Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: *“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá*



ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que *“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.*

Cuarto: Que en base a la lectura y análisis de la acción impetrada por el recurrente es dable señalar que aquélla se funda en si decretada la suspensión del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 458 del Código Procesal Penal, se debía mantener al imputado en prisión preventiva.

Quinto: Que el artículo 464 del referido cuerpo legal contempla la facultad para que alguno de los intervinientes pudiese solicitar la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial, requiriéndose para tal efecto la concurrencia de requisitos copulativos, a saber, que existan antecedentes que justificaren la existencia del hecho punible investigado y la participación del imputado y que la prisión preventiva fuere indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o que su libertad constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o del ofendido -supuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal-; y que la medida no aparezca como desproporcionada en relación con la gravedad del hecho, sus circunstancias y sanción probable y; el informe psiquiátrico que concluya que el encartado sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades de mentales, que hagan temer que atentará contra sí o contra las personas.

Sexto: Que en este orden de ideas, es dable señalar que dicha decisión es de carácter jurisdiccional, en la que fueron ponderados los respectivos elementos de convicción hechos valer por la defensa, los que en su parecer la magistrado recurrida resolvió de manera fundada, pudiendo compartirse o no sus argumentaciones, no configurándose en consecuencia las hipótesis que para tal efecto prevé el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta



Fundamental, en torno a acogerse el presente arbitrio constitucional, dado que su proceder se enmarcó dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescribe la ley -artículos 140, 155 y 458 del Código Procesal Penal-, en completa concordancia con el principio constitucional de legalidad -artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República-

Séptimo: Que por lo demás, la defensa del encartado no impetró el correspondiente recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

En consecuencia, puede renovarse su discusión en cualquier etapa del procedimiento, siempre que se modifiquen las circunstancias que permitieron que aquélla fuere resuelta en la forma pretendida por el ente persecutor.

Octavo: Por último, corresponde indicar que el recurso de amparo es de carácter extraordinario y de naturaleza constitucional, en circunstancias que las alegaciones para fundamentar el mismo sólo inciden en materias para las cuales el legislador contempló recursos ordinarios, los que, en su oportunidad, no fueron ejercitados y por lo demás si se verifican nuevos antecedentes puede solicitarse, a fin de resolverse la resolución que el actor impetra. Entenderlo en sentido contrario, equivale a desnaturalizar el recurso de amparo, transformándolo en un verdadero recurso de apelación.

Noveno: En efecto, la acción de amparo persigue vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, en lo concerniente a la privación o amenaza de atentados contra la libertad personal y la seguridad individual, en el evento que aparezca de manifiesto y claramente apreciable, que lo decidido por un Tribunal no se correspondió al ordenamiento jurídico vigente, pero tal comprensión supone la excepcionalidad de su procedencia, si tal como acontece con el presente caso, se pretendió atacar una resolución pronunciada por un juez en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo al procedimiento fijado en la ley, sobre todo si éste contempla mecanismos de impugnación de lo resuelto, los que en la especie, según se ha indicado no se ejercieron y que habrían permitido a los tribunales designados por la legislación procesal penal, la resolución de los recursos que pudieren haberse deducido, el máximo conocimiento sobre los hechos con el objeto de asegurar la sujeción de lo decidido, conforme al mérito de los antecedentes incorporados por los intervinientes.



De esta forma, se estableció que no dándose en la especie los supuestos que hacen procedente la acción constitucional, toda vez que la actuación realizada por el juez recurrido lo ha hecho como se ha indicado, en el ámbito de su competencia y con estricto apego a la Constitución y las leyes de la República, motivos todos por los cuales se rechazará el recurso de amparo interpuesto.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de Constitución Política de la República, **se rechaza** la acción de amparo deducida en favor de Michael Amigo Jaramillo en contra del Juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago

Se previene que el Fiscal Judicial señor Carvajal, estuvo por rechazar el presente recurso de amparo, teniendo además presente que, la suspensión del procedimiento decretada en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, no acarrea como correlato necesario que el régimen cautelar aplicable se limite exclusivamente a la internación provisional de que se ocupa el artículo 464 del mismo cuerpo legal. Tratándose ésta de una medida que marca el tránsito hacia la plausibilidad, en sede de adjudicación, de la aplicación de la medida de seguridad de internación en centro especializado, en su caso. Así, en ambas internaciones -provisional o a título de medida de seguridad- se presenta la correspondencia de requisitos sobre la grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra terceros, en base a antecedentes suficientes que permitan asentar dicha conclusión. De consiguiente, la ley no ha previsto que, frente a la sola concurrencia de antecedentes que permitan presumir enajenación mental, se desencadenen las consecuencias del binomio cese de toda cautelar versus internación provisional cuya ausencia la defensa estima ilegal en la especie.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Amparo N° 2184-2021

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Ministra señora Verónica Sabaj



Escudero, conformada por el Fiscal Judicial señor Rodrigo Carvajal Schnettler y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E., Fiscal Judicial Rodrigo Ignacio Carvajal S. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a siete de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

